

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email: cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO: 155

FECHA: 29 de Octubre de 2012

AMÉRICA LATINA

HACIA UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN AMÉRICA LATINA

Los procesos políticos nacen, crecen, se estabilizan y decaen. En ocasiones consiguen fecundar procesos nacientes, mientras otros tienden a la esclerosis. Sin pretender establecer leyes deterministas, la historia de los procesos políticos sugiere que estas etapas o momentos se suceden con cierta regularidad. Una década es un tiempo suficiente para observar las grandes tendencias, al situarse en algún lugar intermedio entre la coyuntura y el largo plazo.

En América Latina, y de modo particular en Sudamérica, conocimos una coyuntura relativamente breve en la que se concentraron novedades que luego pudimos visualizar como un cambio de rumbo. Entre 1999 y 2003, aproximadamente, comenzaron a instalarse una serie de gobiernos progresistas y de izquierda que cosecharon la siembra de resistencias e insurrecciones protagonizadas por los movimientos indígenas, campesinos y populares en su prologando rechazo al neoliberalismo.

Le sucedió una década de inusitada intensidad político-estatal como no había vivido la región desde mediados del siglo XX. Se produjo un fuerte aumento del producto interno bruto con base en la exportación de productos naturales, se implementaron políticas sociales para reducir la pobreza, se comenzó un vasto plan de obras de infraestructura y crecieron de forma sostenida los ingresos de los trabajadores. De modo desigual, los Estados-nación adquirieron mayor capacidad de intervenir en la economía y en las sociedades, y algunos recuperaron su capacidad de planificar a largo plazo.

La región adquirió peso y voz propia en el escenario internacional y adelantó proyectos de integración que le dieron cierta independencia respecto de las potencias del norte. Durante un tiempo se vivió un clima de mayor bienestar material y satisfacción, en particular entre los sectores populares, que mejoraron su situación por lo menos en la mayor parte de los países.

En algún momento este clima comenzó a cambiar. La potencia hegemónica, sobre todo durante el gobierno de Barack Obama, recuperó la iniciativa que había perdido durante la gestión de George W. Bush. Las derechas locales aprendieron a moverse en un escenario desfavorable, utilizando formas de acción que acuñaron los movimientos populares. Una política conservadora sin centro de comando aparente comenzó a ejecutarse en todos los países, siguiendo una partitura similar, a veces casi idéntica, siempre amplificadas (cuando no urdidas) por los grandes medios de comunicación.

De forma casi simétrica, los sectores populares organizados en movimientos comenzaron a replegarse. En ocasiones por la eficacia de las políticas sociales que resolvieron las necesidades más acuciantes, a veces porque los propios gobiernos desestimularon o institucionalizaron la movilización y otras porque la confusión política reinante paraliza y neutraliza.

La confusión es un arte. Las guerras sin sentido aparente, como la que algunos gobiernos llevan adelante contra el narcotráfico, tienen el objetivo de paralizar y neutralizar la acción colectiva. Pero también se produce un efecto desmoralizador cuando una lucha es acusada de favorecer a terceros

(hacer el juego a la derecha, dicen los gobiernos progresistas), sin tomar en cuenta las razones de los que protestan.

El resultado es similar en todas partes. Desmoralización de los que resisten. La principal excepción es Perú, donde pueblos enteros enfrentan la prepotencia de las multinacionales y del gobierno. En general, el fervor popular tiende a desvanecerse. Esta es la principal tendencia que vivimos en la región.

Sobre ese repliegue cabalgan las derechas y el Comando Sur, que han diseñado políticas bien diversas. Golpes constitucionales en Honduras y Paraguay. Negociaciones de paz en Colombia. Cooptación de gobiernos progresistas por las mineras. Un diseño para aceitar la acumulación. O sea, desmovilizar a los de abajo, que es el prerrequisito para intensificar la acumulación.

Los procesos de cambio han llegado a una suerte de meseta, mientras las derechas avanzan, en casi todas partes. En Perú recuperaron el timón de mando luego de un brevísimo paréntesis. En Argentina recuperaron las calles con formas muy similares a las protestas de 2001, aunque se expresan con entera libertad cuando una década atrás protestas similares se zanjaban con decenas de muertos.

En Brasil el PT tendrá uno de sus peores desempeños en las municipales, mientras Lula ya no consigue convencer a sus votantes como antaño. En Ecuador y en Bolivia una parte de los luchadores que contribuyeron a llevar a los actuales gobernantes a palacio militan ahora en la oposición. En Uruguay la derecha recurre al plebiscito, como antes los movimientos, con posibilidades de ganar. En Venezuela la derecha crece incluso entre los sectores populares, que siempre sostuvieron el proceso bolivariano.

No es fácil identificar en qué punto estamos. Ciertamente, las primaveras quedaron atrás. Muchos síntomas indican que estamos en un recodo del camino cuando se cierra el ciclo del alza de precios de las *commodities*. O se avanza o se pierde. Una década de políticas sociales sin cambios estructurales no alcanza para modificar la relación de fuerzas heredada. La profundización de la crisis mundial empieza a erosionar apoyos y lealtades y, sobre todo, abre huecos donde las clases medias juegan su partida.

Hace falta un nuevo ciclo de luchas, como el que barrió el continente desde la segunda mitad de la década de 1990, para dar un vuelco a una situación pautada por el conservadurismo de masas, alentado por el consumismo, la osadía creciente de Washington y la parálisis del progresismo.

Pero los ciclos de luchas no se sacan de la galera. Se construyen contra la corriente, con base en el tesón y la entrega militante de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que dedican su vida a la causa de los de abajo. Lo preocupante es que esa energía ha sido cuestionada y hasta criminalizada estos años, no sólo por las derechas y el imperio.

Fuente: [Raúl Zibechi. La Jornada](#)

BOLIVIA

EL CARÁCTER DE LOS CONFLICTOS EN LA BOLIVIA ACTUAL

Las relaciones entre desarrollo económico y protección ambiental cruzan hoy, prácticamente, todos los procesos latinoamericanos. El continente necesita, absolutamente –después de una fuerte y prolongada recesión–, poder atacar su problema central: la desigualdad económica. Es que conforme los gobiernos neoliberales promovieron la desindustrialización y la apertura acelerada de los mercados internos, la situación de la demanda internacional cambió: la exportación de productos primarios –entre ellos los energéticos– pasó a tener un papel central en la pauta comercial de América Latina.

Esta combinación produjo conflictos explosivos en casi todos los países del continente, con gobiernos progresistas o no. Bolivia no es una excepción, aún teniendo, por primera vez, un

presidente indígena y un gobierno apoyado directamente por los movimientos de habitantes originarios.

El proyecto de construcción de una carretera cruzando la reserva de los Tipnis (*), ubicada entre Cochabamba y el Beni, condujo a grandes polémicas y muchos conflictos. La cobertura de prensa fuera de Bolivia fue totalmente unilateral, promoviendo un brutal y cobarde cerco informativo contra el gobierno de Evo Morales.

Dentro del país, los medios privados exaltaron los movimientos opositores al proyecto del gobierno, apareciendo, paradójicamente, como defensores de los indígenas y de la ecología. Como en todos los países de la región, la finalidad de minimizar al gobierno, mediante una insólita alianza de la derecha con sectores del movimiento popular.

A lo largo de toda la crisis de los Tipnis, nadie, o casi nadie, dio cabida para escuchar las voces del gobierno –en particular de Evo Morales y Álvaro García Linera–. Su interés era condenar la supuesta traición del gobierno originario del movimiento indígena, que reprimía a esos movimientos y violentaba sus reservas.

Álvaro García Linera publicó un libro que refuta todos y cada uno de los alegatos de la oposición y de sus portavoces bolivianos e internacionales. A pesar de ser el más importante intelectual latinoamericano contemporáneo y, al mismo tiempo, vicepresidente de la república, se buscó ejercer sobre sus palabras la censura y el cerco cobarde que se emplea sobre el proceso boliviano.

El libro se titula *Geopolítica amazónica*, y se le subtituló *Poder hacendario-patrimonial y acumulación* (capitalista). Fue publicado por la vicepresidencia de la república, y participé de su lanzamiento en La Paz, el 8 de septiembre, con la asistencia de un público –mayoritariamente– joven de unas mil personas.

En él, Álvaro comienza por exponer las transformaciones logradas por el gobierno en estos seis años, que permiten decir que se trata de un proceso revolucionario –una revolución político-cultural y económica, en sus palabras–. Transformaciones en la adecuación del poder del Estado y en las propias formas de adoptar decisiones que caracterizan los profundos cambios políticos y culturales vividos por Bolivia. Transformaciones en la propiedad de los principales medios de producción –en el campo, en los sectores industriales– marcan la revolución en el plano económico.

Sin embargo, el libro de Álvaro se centra en desmentir los supuestos que orientan la campaña mediática de la oposición –dentro y fuera de Bolivia– contra el gobierno. Entre estos, uno es el que circula la idea de que la carretera de Tipnis sería parte de la IIRSA (**), como instrumento de exportación de los productos brasileños hacia el Pacífico, valiéndose del territorio boliviano.

El libro demuestra, claramente, que la carretera llega a territorio boliviano como parte de la unificación nacional del país, siempre fragmentado y dependiente; en este caso, el pasaje por Santa Cruz de la Sierra aporta a la conexión entre Cochabamba y el Beni –provincia esta última en que el gobierno desarrolla amplios proyectos agrícolas que liberarían a su economía de la dependencia de su vecina cruceña. Por eso Álvaro llama farsa cantinflasca la acusación.

Otra falsedad tiene que ver con una supuesta imagen de los Tipnis como una reserva virgen, que sería violada por la carretera que el gobierno proyecta construir. El libro demuestra, con hechos –mapas y fotos– cómo esa región es intensivamente explotada por las grandes empresas internacionales del sector de la madera, de la caza de cocodrilos y por ganaderos, entre otros. Varios aeropuertos clandestinos sirven para algunas de estas actividades, así como un intenso turismo internacional.

Es así que la no presencia del Estado, propugnada por las ONG internacionales y algunos movimientos indígenas, lo que defienden no es la inexpugnabilidad de la reserva, sino la permanencia y extensión de esas explotaciones, con la ausencia del Estado nacional boliviano. Álvaro acusa a esas ONG y movimientos indígenas de defender, de esa forma, los intereses de grandes multinacionales y de gobiernos extranjeros.

El poder en la Amazonia boliviana es detentado, entonces, por esas empresas, por gobiernos de países centrales del capitalismo, por un bloque hacendado-empresarial que explota materias primas de la región y por un conjunto de ONG que actúan en la zona. Al final del libro, Álvaro se concentra

en el argumento de que en Bolivia –como también otros países progresistas de la región– se desarrolla un modelo extractivista, negativo para el desarrollo económico y social. Después de retomar criterios clásicos de Marx sobre las formas de apropiación de la naturaleza por la humanidad, Álvaro concluye: No existe evidencia histórica que certifique que las sociedades industriales capitalistas sean menos nocivas frente a la Madre Tierra que las que se dedican a la extracción de las materias primas, renovables o no renovables. Superar el extractivismo no es superar el capitalismo. En esta fase se hace indispensable utilizar los recursos aportados por la actividad primaria o exportadora controlada por el Estado para generar los excedentes que permitan satisfacer las condiciones mínimas de vida de los bolivianos y garantizar una educación intercultural y científica que genere una masa crítica capaz de asumir y conducir los procesos emergentes de industrialización y de economía del desarrollo.

Si se dejara intempestivamente el extractivismo se perdería la oportunidad de la acumulación de recursos para el salto hacia una economía basada en la industria y en el conocimiento. La simple condena al extractivismo dejaría la economía del país pobre e inerte, relegado a su estado actual. Sería la estagnación, que prepararía el camino para la restauración conservadora que los opositores desean. Lo importante es reorientar el sentido de la producción sin olvidar que es preciso satisfacer las necesidades básicas fundamentales, que fueron precisamente las que llevaron a la población a construir el poder del Estado. Justamente lo que estamos haciendo en Bolivia:

Es, por lo tanto, un libro esencial, sin el cual la visión de los conflictos y de la etapa actual del proceso boliviano serían imposibles de comprender.

Notas:

(*) Tipnis: Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure

(**) IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana

Fuente: [Emir Sader. La Jornada](#)

LAS MODALIDADES DE GUERRA PERMANENTE CONTRA LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA

Evo Morales y el proceso de cambio en Bolivia están enfrentando, incluso desde antes que se ganara las elecciones de diciembre de 2005, diversos tipos de guerra en el más amplio sentido del concepto empleado ahora por los estrategas del imperio más poderoso que la humanidad haya conocido jamás.

La afirmación del presidente Evo Morales de que Estados Unidos le ha declarado la guerra al proceso de cambio boliviano es muy tajante y quizá en determinados sectores sociales sea interpretado como una exageración, sobre todo cuando se apela al concepto clásico del uso de la fuerza para derrotar al otro bando.

Pero cuando se hace referencia al concepto de guerra empleado desde los Estados Unidos a partir de la década de los 90, que no es otra cosa que la resignificación del concepto utilizado por Karl von Clausewitz–el jefe militar prusiano que derrotó a Bonaparte en la batalla de Waterloo–, las palabras del jefe del Estado Plurinacional adquieren sentido.

Para los departamentos de Defensa y Estado de EE.UU. la Guerra de Baja Intensidad –una de las tres modalidades de guerra definidas por la administración Reagan para preservar la hegemonía mundial estadounidense y hasta ahora vigentes–, es la combinación de diversas medidas políticas, ideológicas, mediáticas, económicas y militares para derrotar cualquier proceso social que ponga en peligro la dominación imperial en los países del Tercer Mundo, del que América Latina forma parte.

Pero a este concepto, resignificado a la luz de dos experiencias traumáticas para Estados Unidos: el triunfo de la revolución sandinista y la derrota en Vietnam, así como dentro de la llamada revolución conservadora se añade un segundo concepto, también redefinido a la luz de la realidad, en los manuales estadounidenses: el de victoria, que cambia radicalmente respecto del concebido en la clásica Doctrina de la Seguridad Nacional.

En la Doctrina de la Seguridad Nacional, cuyos orígenes se encuentran en la década de los 60, el concepto de victoria implicaba la derrota o aniquilamiento físico del enemigo, lo cual explica el por qué las Fuerzas Armadas locales –utilizadas por el imperio para el desarrollo de sus planes-, provocaron miles de muertos, desaparecidos y heridos en la instalación y defensa de las dictaduras militares o en la detención y asesinato de guerrilleros, como ocurrió con Ernesto Che Guevara y Marcelo Quiroga Santa Cruz en las décadas de los 60 y 80, respectivamente, por solo citar hechos bastante conocidos en Bolivia y el mundo.

En contraste con ese concepto restringido de victoria, la Guerra de Baja Intensidad lo amplía, pues desde inicios de la década de los 80, el triunfo implica lograr la derrota política del enemigo, es decir quitarle base social, minar moralmente sus fuerzas, aislarlo de la mayor parte del pueblo y, si además fuera necesario, golpearlo militarmente. La victoria, por tanto, es privarle a las fuerzas progresistas y revolucionarias de su natural base social, de la misma manera como se quita el agua al pez para que éste muera.

Con la resignificación de ambos conceptos –el de guerra y el de victoria-, el imperialismo puso en marcha en América Latina una nueva ofensiva político-militar destinada a “conquistar el corazón y la mente de las gentes” y eliminar la mínima posibilidad de proyectos contestatarios a su hegemonía.

Una de sus medidas no militares en el sentido clásico para garantizar la reproducción de la hegemonía estadounidense en la región ha sido la democracia controlada, cuya forma política en Bolivia fue la democracia de pactos. Esta implicaba aislar a las fuerzas socialdemócratas de la izquierda política y social más radical, incorporarlas al juego por el gobierno temporal (gobierno como tal) sin modificar lo central del gobierno permanente (el estado). Es decir, no alternativa pero si alternancia dentro del mismo proyecto de dominación.

Pero vayamos bajando en la aplicación de estos conceptos a la realidad boliviana de los últimos diez años, lo cual permitirá constatar que la afirmación de que Estados Unidos le declaró la guerra al proceso boliviano no carece de sentido. Desde una perspectiva más amplia puede decirse que se han desarrollado al menos cuatro tipos de guerra: mediática, económica, política y subversiva.

Si ubicamos los orígenes del proceso de cambio en el año 2000, cuando el bloque de las clases subalternas empieza a jugar un papel de dirección efectiva y real de la sociedad, en contraposición a los centros de poder institucionalizados cada vez más acorralados y deslegitimados, vamos a encontrar que la guerra contrainsurgente alentada por el imperio tuvo en mayo-junio de 2003 su máxima expresión, en un intento fallido de colocar a Hormando Vaca Díez como presidente del país.

Contra la revolución boliviana y su líder se han construido varias matrices de opinión: totalitario, permisible con el narcotráfico, aliado de los países que “promueven” el terrorismo y violador de los derechos humanos. Cada una de estas se han desarrollado en distintos momentos, aunque a veces se han articulado en una misma temporalidad. Es más, la campaña de desprestigio contra Morales se remonta a las elecciones de 2002, cuando el embajador estadounidense Manuel Rocha llamó a votar en su contra.

El instrumento más importante para la creación y difusión de estas matrices de opinión han sido los medios de comunicación, nacionales e internacionales, cuyas narrativas nos conducen a autoridades estadounidenses, a dirigentes políticos nacionales desplazados a un lugar secundario en la escena política, así como a analistas cuya concepción del mundo está reñida con la aspiración emancipadora de los pueblos. Pero sobre todo nos conduce a dos pilares fundamentales de la política exterior estadounidense y de su política doméstica: la guerra como mecanismo de dominación y el temor como dispositivo para la generación de consenso nacional.

En diciembre de 2009, por ejemplo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, lanzó una advertencia contundente: “Estamos muy conscientes de la intención de Irán de ampliar sus vínculos con algunos países como Venezuela o Bolivia y solo podemos decir que realmente es mala idea para los países involucrados”.

Las declaraciones de Clinton obviamente apostaban a crear temor y desinformación en la población de ambos países. EEUU no ha dejado de hacer campaña, como parte de los preparativos de una intervención militar hasta ahora no respaldada por Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la

ONU, para instalar en la mente de la gente a nivel mundial de que Irán está desarrollando armas nucleares con fines militares.

Lo que ninguna autoridad estadounidense dice, por razones obvias, que el estado iraní mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con la mayor parte de los países de América Latina, con la sola excepción de unos cuantos, dentro de los cuales está Panamá.

La Casa Blanca también es la principal responsable de que Bolivia sea permanentemente asediada por el crecimiento de la producción y el tráfico de cocaína, sobre todo desde que el presidente Morales dispusiera la expulsión de la DEA en septiembre de 2008, acusada de llevar adelante tareas de inteligencia con fines políticos.

A partir de ese hecho político, que demostró la recuperación de la soberanía, Bolivia ha sido objeto de ataques permanentes. Estados Unidos ha descertificado al país en materia de lucha contra las drogas, a pesar que, por ejemplo, en 2011 es el país que más ha reducido –sin violencia y concertadamente- sus cultivos excedentarios de coca (12%) frente a Perú y Colombia –que no superaron el 3%- y el que más operativos antidroga ha desarrollado con bastante éxito, según el reporte de Naciones Unidas.

Otro de los hechos utilizados por EEUU para construir en el imaginario colectivo una montaña de sospechas sobre la relación del gobierno boliviano con el narcotráfico es la detención del general René Sanabria en la ciudad de Panamá, en febrero de 2011 en un operativo coordinado con la policía chilena.

Una semana antes de que se realizara el operativo de la DEA en Panamá contra Sanabria –que en el pasado fue un activo colaborador de la DEA-, un agente de apellido Tillery participó en una reunión secreta en la embajada estadounidense en La Paz, donde también estuvo presente el señor Rodney Delano Smith, alto oficial de la CIA en Bolivia, bajo fachada de Primer Secretario de la Misión estadounidense a cargo de asuntos regionales.

En esa reunión secreta en la embajada de Estados Unidos fue precisamente Delano, el que -luego de evaluar la situación- propuso a la oficina central de la CIA en Virginia la pertinencia de la operación detención de Sanabria en Panamá. De acuerdo a la información, Delano fue el encargado de planificar esta operación, que ya en una primera parte contó con la colaboración de agentes de la inteligencia estadounidense en Chile y con los propios organismos de seguridad del vecino país

En la mencionada reunión y a sugerencia de Tillery, se acordó la participación directa del oficial DEA radicado en Paraguay Andy Banks, en el operativo de detención de Sanabria. Banks es un viejo compinche de Tillery. Durante los años de 2007 hasta febrero de 2009 estuvo radicado como oficial de la DEA en Cochabamba, al igual que otros agentes de la DEA se dedicó más a la labor subversiva y de espionaje contra el gobierno popular de Evo Morales que a colaborar con las autoridades bolivianas para combatir el narcotráfico.

Por lo tanto, ya es muy claro que el general Sanabria, a quien la DEA tenía como un cercano colaborador, fue convertido de la noche a la mañana en un narcotraficante por los servicios especiales estadounidenses, con el objetivo de poder presentar un supuesto testigo de este nivel, que le permita a Washington montar una nueva campaña difamatoria contra el gobierno boliviano, alegando la existencia de supuesta corrupción y vínculos con narcotráfico en sus más altas esferas.

El segundo tipo o modalidad de guerra es la política. Le ha correspondido al embajador Philip Golberg, expulsado por el gobierno de Evo en septiembre de 2008, desarrollar una activa agenda con la oposición más violenta y ultraderechista, principalmente asentada en la entonces denominada la “Media Luna”, conformada por los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, a la que luego se sumó Chuquisaca.

Golberg -un político con bastante experiencia en temas de desestabilización fue una de las principales figuras en la desarticulación de Yugoslavia y ahora es director de inteligencia en el Departamento de Estado-, mantuvo una estrecha relación con la dirigencia cívica opositora y alentó –según volvió a recordar Morales el 13 de octubre- el intento de golpe de estado, cuya apuesta era la división del país en dos (la Bolivia del occidente y la Bolivia del oriente).

Le ha correspondido al representante estadounidense organizar una entrevista clandestina a diputados de su país con la oposición, instruir a jóvenes ciudadanos norteamericanos el seguimiento de las actividades de los médicos cubanos y venezolanos, así como abrir el trabajo hacia las organizaciones indígenas con menos historia de politicidad, como es el caso de la CIDOB y Conamaq.

Por tanto, esa guerra política contra el proceso de cambio adquiriría a la vez la forma de guerra subversiva. Esta guerra, además de lo anteriormente explicado, ha ido desde el financiamiento directo con fondos de USAID a organizaciones políticas y sociales opositoras, así como ciertos movimientos de cierta naturaleza militar en el sentido amplio.

Si bien todavía no existe información suficiente sobre el grado de participación de los servicios secretos de Estados Unidos en la organización, planificación y ejecución del plan terrorista encabezado por el croata Eduardo Rozsá entre octubre de 2008 y abril de 2010, que consideraba incluso el asesinato de Evo Morales, la huida de muchos de sus protagonistas a territorio estadounidense tras la oportuna desactivación por parte de la seguridad boliviana, es un indicio muy serio de su presencia.

El grupo terrorista, integrado por otros extranjeros y algunos nacionales, mantenía una relación muy estrecha con altos dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, los cuales a la vez tenían contactos muy frecuentes con la embajada de los Estados Unidos, aún después de la expulsión de Golberg.

Otra de las principales acciones de la embajada de los Estados Unidos dentro de la guerra subversiva ha sido el intento –desactivado por el gobierno boliviano– de traslado de armas, municiones y equipos de telecomunicaciones del departamento del Beni a Santa Cruz, el 27 de mayo de 2012, donde se usó un vehículo diplomático.

Pero a la guerra política hay que añadirle la guerra económica por doble partida. Por un lado, excluyendo a Bolivia de la aplicación de las preferencias arancelarias (Atpdea) y, por otro lado, alentando a principios del gobierno de Evo a que los sectores productores de Santa Cruz generaran un ambiente de desabastecimiento. A la primera se le respondió, desde el gobierno, diversificando mercados para los textiles con Venezuela y otros países del ALBA, pero también con Brasil y Argentina en menor medida. A la segunda se le respondió con la creación de EMAPA, una empresa nacional de alimentos encargada de desarrollar tareas de acopio y distribución.

No es poco entonces lo que el proceso de cambio ha tenido que enfrentar desde mucho antes de que Evo Morales se convirtiera en el primer presidente indígena de Bolivia y sería ingenuo pensar que el principal líder de la revolución boliviana no vaya a seguir siendo sistemáticamente asediado por todo tipo de guerras. En un primer momento se lo hizo para impedir su victoria, ahora se lo hace para evitar la consolidación del proyecto emancipador.

Fuente: [Hugo Moldiz Mercado. Rebelión](#)

COLOMBIA

¿QUIÉN LE TIENE MIEDO A LA PAZ EN COLOMBIA?

Asistimos a un momento histórico: el comienzo del dialogo entre el actual gobierno colombiano y los representantes del más antiguo movimiento guerrillero de América Latina, las FARC-EP. Su resistencia ha enfrentado y visto desfilar 12 gobiernos y 11 presidentes de derecha y de extrema derecha, a lo largo de más de 52 años de alternancias al interior del régimen.

La resistencia de este movimiento guerrillero, nacido en 1964, es su asidero histórico, no sólo en el tiempo y en la continuidad de su discurso, sino también en la legitimidad del eje principal de su lucha, convertido en principio no negociable: la necesidad de obtener una verdadera justicia social para todos.

Debiera alegrarnos el principio de estos diálogos... Sin embargo, se hace necesaria la prudencia. No se puede omitir que las negociaciones de mediados de los 80's acabaron en un baño de sangre en

el que las víctimas fueron los miembros del movimiento de izquierda Unión Patriótica, y tantos otros colombianos opositores al régimen, asesinados por miles a lo largo de las dos últimas décadas.

Todos los colombianos siguen entonces con atención estas premisas de una posible paz. La tierra misma de Colombia necesita paz, esa tierra ahogada en sangre y sufrimientos, al punto de no poder absorber ni una gota más: masacres sistemáticas; miles de muertos en las fosas comunes descubiertos de unos años para acá; restos de desaparecidos hallados en grandes hornos a gas instalados en las haciendas donde hasta hace poco había campamentos paramilitares; cientos de miles de asesinados desde los años 50's; más de 62 mil casos de víctimas de la desaparición forzada que cursan actualmente en la Procuraduría General de la Nación; miles y miles de mujeres y jovencitas violadas; jóvenes y niños torturados, ahorcados, quemados, estropeados para siempre; familias enteras obligadas a jugar macabros partidos de fútbol con las cabezas de sus abuelos y padres decapitadas por los paramilitares; miles de despedazados con moto-sierras por el "delito" de negarse a abandonar sus modestas parcelas de tierra; millones de refugiados internos que son hoy, según estimaciones fiables, mas de 5,4 millones de personas que lo han perdido todo...

¡Triste record mundial! El pueblo raso colombiano no soporta más tanto vejamen, tanta desgracia.

La lista de esos horrores cubiertos por el silencio podría tomarnos libros enteros, durante años. Una barbarie sin nombre perpetrada por las fuerzas armadas colombianas y sus instrumentos criminales, los paramilitares, todos ellos al servicio de una oligarquía apoyada por los Estados Unidos, que han infiltrado, "narcotizado" y corrompido a las instituciones colombianas bajo la mirada cómplice de los "demócratas" de tantas y tantas instituciones democráticas de América y del mundo... y todo ello en nombre de su sacrosanta democracia.

Este nuevo proceso por la búsqueda de la paz, que ha relanzado en los sondeos de opinión al Sr. Juan Manuel Santos (quién combatió a las FARC-EP en calidad de ministro de la guerra, o de la defensa como dicen ahora, durante el doble gobierno de Uribe, del 2002 al 2010), ha hecho subir a las tarimas al ex presidente Alvaro Uribe, vía su Twitter (<https://twitter.com/AlvaroUribeVel>), quién no cesa de gritar que ese proceso es un escándalo.

Sí, hablamos del mismo Uribe quien durante su gobierno transformó, por obra y arte de la semántica, a sus bandas paramilitares y a las de sus narco-aliados en hechos inexistentes, a través de una figura etérea y pseudo-jurídica conocida hoy en el lenguaje penal colombiano como las "bacrim" (bandas criminales), lo que desvincula a estos criminales de sus verdaderos orígenes, es decir la defensa del establishment.

Consecuencia de ello, es que ni los asesinos, ni sus jefes, Uribe incluido, deben responder ante la ley, obviamente, porque los paramilitares bajo sus órdenes ya desaparecieron, al menos en el papel. El colmo de los colmos, es que aquel ejército de criminales, fue considerado en la práctica como "insurgentes defensores del estado". ¡Ni más ni menos!... "los niños buenos del paseo", defensores del terrorismo de estado en nombre de los intereses de la oligarquía colombiana y de los intereses de los USA y de las multinacionales.

Ese ex presidente colombiano, Uribe, al contrario de tantos de sus compatriotas, no se alegra hoy por la nueva posibilidad de paz puesto que ésta pondría en peligro los intereses de la plutocracia, la oligarquía y la nueva narco-oligarquía a la cual él pertenece.

La PAZ significa que ese espeso velo de horrores y corrupción tiene que caer para poder reinventar otra Colombia. Tocaré asumir los genocidios y, a no dudarlo, crear tribunales populares, tal vez sobre el modelo de Ruanda, los "Gacaça", a los que debieron acudir tantas y tantas personas implicadas en las masacres, incluido el ex presidente de ese país.

No hay familia en Colombia que no haya sido golpeada de una manera o de otra por esta larga y terrible guerra... pero Uribe y sus aliados tal vez no sienten como los demás colombianos. Se diría que esta posibilidad de paz, no les concierne en lo absoluto, no es la de ellos. Él, Uribe, es hoy conferencista internacional a sueldo de la "News Corp", la de Rupert Murdoch, para ganar aún más dinero, exactamente como ya lo hacía antes, como presidente de Colombia. La paz en ese país, él y sus amigotes, no la quieren... *"!!! just a lot of Money, please, as usual!!!"*

[Djemâa Chraiti](#) - Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL)

ENEL-ENDESA EMGESA y MADS A JUICIO POR ECOCIDAS

ENEL, ENDESA, EMGESA especializados en autoproclamarse ejecutores ejemplares de los principios de la "Responsabilidad Social Empresarial", en connivencia con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, son procesados por responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la Nación por detrimento patrimonial que supera los 350.000 millones de pesos Colombianos (cerca de 200 millones de dólares).

Además, se dio traslado a la Procuraduría General de la Nación para efectos disciplinarios y la Fiscalía General adelanta investigación contra los responsables del delito de "Daños Ambientales".

Los costos de los daños causados (US 200 millones) son superiores a la inversión que Emgesa está obligada a realizar por compensaciones sociales y ambientales y equivalen aproximadamente a la cuarta parte de la inversión que demanda el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, calculada en 830 millones de dólares.

Asoquimbo, mediante estudios de seguimiento y control al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo había demostrado la existencia de una crisis humanitaria causada por la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, daños al Patrimonio Arqueológico y la vulneración de todos los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente sano.

De acuerdo con la valoración de los hechos y las pruebas, la Contraloría General precisa los costos por afectación a la "movilidad; pérdida de la productividad marginal de la tierra; vertimientos de material al río Magdalena; incumplimientos en la realización de revegetalización; retrasos en la restitución de empleos asociados a las zonas productivas y en la restauración de los servicios ambientales de los bosques; e impacto ambiental sobre la fauna y la flora".

Fulvio Conti, Director de la Italiana ENEL, accionista de Emgesa, sostuvo en la reciente Junta General de Accionistas realizada en Roma, el 30 de abril de 2012, que su empresa se caracterizaba por ser responsable y por cumplir estrictamente con lo establecido en la Licencia Ambiental y las normas, razón por la cual el Gobierno Colombiano estaba obligado a garantizarle la seguridad jurídica y, en consecuencia, expresó que compartía el desalojo de las personas que se encontraban, según Conti, "invadiendo predios de las obras del Quimbo", cuando en realidad eran pescadores que realizan su oficio en su hábitat natural, el río Magdalena y estaban exigiendo el cumplimiento de la Licencia Ambiental.

Ahora que han sido vinculados a los procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal por ecocidas, ENEL, ENDESA, EMGESA y EL MADS ¿estarán dispuestos a reparar el daño suspendiendo definitivamente el proyecto hidroeléctrico y a indemnizar por las afectaciones a la Nación, al Huila y a las comunidades? o ¿Continuarán las obras burlándose de la Constitución y la Ley, acudiendo al poder del dinero y a la laxitud de altos funcionarios?

Con la fuerza de los argumentos y la resistencia civil, Asoquimbo continuará la defensa del Territorio y por una política minero energética soberana y autónoma.

ASOQUIMBO

GUATEMALA

MILITARES, TRANSNACIONALES Y NEOLIBERALES

Guatemala, 4 de octubre de 2012, Totonicapán. El ejército asesina a ocho personas, desaparece a otra, y hiere de bala y de arma blanca a múltiples mujeres y hombres procedentes de los 48 cantones del territorio. Motivo: las movilizaciones pacíficas llevadas a cabo con el objetivo de protestar frente a los abusivos precios de la electricidad, así como por la defensa de la educación pública y de calidad, entre otros reclamos.

Guatemala, 1 de mayo de 2012, Santa Cruz de Barillas. Una persona es asesinada y 10 permanecen hoy en día todavía encarcelados, acusados de sedición y terrorismo, enfrentando penas de incluso 50 años. Motivo: La oposición mayoritaria de las comunidades del municipio a la construcción de una central hidroeléctrica, decisión que incumple la legislación internacional (convenio 169 de la OIT), ya que no respeta la consulta popular realizada, y que mayoritariamente vota no a este proyecto.

Estos son dos ejemplos recientes de toda una serie de agresiones violentas a los sectores populares en Guatemala. Desgraciadamente, la lista es amplia, y su periodicidad, persistente: Polochic, San Juan Sacatepérez, Uspantán, etc., son sólo algunos de los casos más graves. Ante ello, pudiéramos caer en la tentación de interpretarlos como hechos aislados. O, quizá, como la continuidad inerte de la ya de por sí muy violenta historia de Guatemala desde los años 60 del siglo pasado.

Lamentablemente, creemos que no es así. Al contrario, pensamos que la escalada de violencia política no es sino el ensayo de un modelo social todavía más excluyente y antidemocrático, en el que se plantea incluso la implantación de nuevos gobiernos cívico-militares. Éstos serían, de esta manera, la única forma política capaz de sostener la agudización del proyecto neoliberal en esta crisis civilizatoria. En este sentido, el gobierno actual, presidido por Pérez Molina (militar e implicado en el genocidio producido durante el conflicto armado entre 1960-1996), no sería sino un paso más en esta estrategia de militarismo neoliberal.

En este punto es necesario resaltar que este nuevo modelo no es una cuestión estrictamente guatemalteca, sino que tiene a su vez alcance global. Así, cada vez más, y por supuesto que no sólo en Guatemala, el capitalismo y la democracia entran en una contradicción creciente, incluso con la democracia de baja intensidad actualmente hegemónica. De esta manera, la lógica capitalista, ante la crisis actual, no hace sino acrecentar la búsqueda desesperada de ganancia, y se está dispuesto a todo con tal de conseguirla. En este sentido, y consciente de su creciente falta de legitimidad, los actores fundamentales del sistema –empresas transnacionales y oligarquías locales- se quitan progresivamente la careta democrática y recurren a la fuerza, a la violencia, a la represión, para poder desarrollar su proyecto injusto e inequitativo. Siempre lo han hecho, ya lo sabemos, pero ahora de manera más evidente, sin ambages, a cara descubierta. Y necesitan experiencias probatorias para ello: Guatemala es uno de sus exponentes.

Este sería por tanto la propuesta política que se ensaya en Guatemala: empresas transnacionales; oligarquías alineadas con los mercados globales; policía y ejército como elementos de represión generalizada; gobiernos sin pretensiones ni ropajes democráticos, al servicio explícito y directo de las necesidades de los que detentan el poder.

Así, la violencia política que sufre el país puede ser entendida a la puesta en práctica de este proyecto militarista neoliberal, atajando la contestación social y preparando el camino para este tipo de gobierno, no de mano no dura, sino durísima. De esta manera, si escarbamos un poco en los casos antes citados, descubriremos que el gobierno del militar Pérez Molina y la Embajada Española apoyan de manera explícita la construcción ilegal de la hidroeléctrica en Barillas por parte de la empresa constructora, que no es otra que la gallega Hidralia Energía, favorecida con créditos de Bankia. Al parecer, el supuesto asesino es parte de la filial de dicha empresa, la Hidro Santa Cruz, según informan fuentes comunitarias.

O también descubrimos que la causa que generó la movilización que acabó con el asesinato de 8 personas a manos del ejército en Totonicapán -el precio desorbitado de la luz-, tiene su origen en la privatización del sector, que pasó a manos de Unión Fenosa, que después vendió la empresa a una compañía colombiana. Ambas, por supuesto, incrementaron precios e impidieron cualquier negociación ni diálogo con las comunidades.

Pero aún descubrimos más. En un país de enorme pobreza, y a la vez que ocurría todo esto, se anuncia también la compra de seis aviones militares y de radares especiales por parte del ejército guatemalteco, presumiblemente con fines antisubversivos. El valor enorme de esta compra se financia con créditos millonarios, concedidos por el BNDES brasileño y...por el BBVA.

Esto es lo que hay, por tanto: empresas gallegas, españolas, colombianas, ejército, seguridad privada, oligarquías, gobierno guatemalteco, embajadas, por un lado. La ciudadanía, los sectores populares, por el otro. La cuerda se tensa.

En definitiva, son varios los aprendizajes que tenemos que hacer de la situación de Guatemala: el primero, que este capitalismo salvaje sólo se para con una fuerte, rotunda y contundente contestación social, y los movimientos sociales y comunitarios guatemaltecos lo están haciendo. Desde aquí nuestro más profundo reconocimiento; el segundo, la solidaridad internacionalista es fundamental este momento, ya que la denuncia y la contestación frente a todos los actores involucrados es una responsabilidad compartida y global, al igual que las redes capitalistas globales que vemos operan en Guatemala; el tercero, Guatemala no es sino la antesala de lo que puede llegar a otras latitudes, también aquí a Europa. En este sentido, siempre creímos que el ajuste estructural era cuestión de países empobrecidos, y, mira por donde, ahora lo tenemos encima, aplastándonos. ¿Queremos que Guatemala prefigure otra vez nuestro futuro? Parémoslo mejor ahora, por ellos, por ellas, pero también por nosotros, por nosotras.

Actuemos, denunciemos, generemos alianzas, confianzas. Toda nuestra solidaridad por tanto con el pueblo de Guatemala, toda nuestra denuncia a las empresas transnacionales europeas. Un futuro común, una lucha común.

Fuente: [Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate](#). Alainet

HAITÍ

MINUSTAH SE QUEDA 4 AÑOS MÁS EN CONTRA DE LA POBLACIÓN

El jefe de las fuerzas de ocupación de las Naciones Unidas en Haití declaró que la MINUSTAH permanecerá cuatro años más en el país. Este 15 de octubre se vencía su mandato y, a pesar de que los movimientos sociales haitianos rechazan la presencia de este ejército multinacional involucrado en graves hechos.

“El Colectivo de Movilización para la indemnización de las víctimas de cólera” realizó una sentada frente a la base logística de la [MINUSTAH](#) (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti) para exigir la salida de las fuerzas de ocupación y la indemnización de las víctimas del cólera. Aquí puedes ver el vídeo de la protesta realizada el 15 de octubre en Puerto Príncipe (AlterPresse): http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s08jO1NBpn4

Durante la protesta, fueron agredidos Jean Henry Claudy, miembro de la organización "Chandel", que forma parte del Colectivo, y el periodista y fotógrafo haitiano Olrich James. Un policía estadounidense decomisó el equipo de James. El periodista recuperó su material de trabajo más tarde gracias a la intervención de miembros del Colectivo.

Este 15 de octubre finalizaba el mandato de la ONU que autoriza la ocupación de Haití. Sin embargo, el Consejo de Seguridad anunció que prolongaría por un año más la permanencia de la fuerza multilateral en Haití. El Secretario General recomendó mantener la fuerza de ocupación 5 años más y el jefe de la Minustah anunció que la misma permanecerá al menos 4 años más.

El cólera: ¿Nueva ofensiva de la Minustah?

En el año 2010, *Associated Press* y *Al Jazeera* constataron que luego de un recrudescimiento de cólera en Nepal, soldados procedentes de ese país llegaron a la base de la de Minustah en Mirebalais. Las agencias corroboraron *in situ* que las letrinas de la base tenían un escape de materia fecal y que estaban ubicadas cerca del río Meille, afluente del río Artibonite. En esta región se inició el brote de cólera en Haití. El mismo año, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos concluyó que la cepa de la bacteria que causó el brote de cólera en Haití coincide con la variedad endémica en Asia meridional.

La ONU estima que la epidemia, que aún persiste, ha causado 7.440 muertes y unos 580.000 infectados hasta julio de 2012. En mayo de 2012, [The Economist](#) estimó que el presupuesto anual de funcionamiento de la Minustah, que asciende a 800 millones de dólares, “podría ser suficiente

para renovar la decrepita infraestructura hídrica del país. Eso podría haber evitado la epidemia del cólera”.

Cuestionado sobre la implicación de la Minustah en la introducción de la epidemia de cólera en Haití, el jefe de las fuerzas de ocupación, Mariano Fernández Amunategui, declaró que su ejército trabaja con los ministerios de la salud de Haití y República Dominicana para desarrollar una ofensiva contra el cólera. No agregó detalles sobre su participación en dicha ofensiva y tampoco se pronunció sobre la vinculación de las deterioradas letrinas del destacamento nepalés en la introducción del cólera en el 2010.

De manera reiterada, organizaciones de derechos humanos han denunciado la implicación de soldados de las fuerza de ocupación en abusos a menores, torturas y humillaciones a la población civil haitiana. El portal [“Encuentro Norte Sur”](#) denunció que la Minustah “mostró su verdadero rostro luego del terremoto del año 2010, cuando permitió con docilidad el ingreso de 22.000 soldados de Estados Unidos que tomaron el control de todo el país y sus centros neurálgicos”.

La misma fuente afirma que “el pueblo haitiano no necesita soldados y armas extranjeras. Necesita la solidaridad de nuestros países, expresada en alimentos, medicamentos y misiones de ayuda sanitaria, de ingeniería, educativa y humanitaria, dispuestas a trabajar codo a codo con ese pueblo, en apoyo de sus planes y propuestas. Eso no llegará de la mano de tropas militares”.

Fuente: Otramérica

HONDURAS

GUARDIAS ARMADOS DEL TERRATENIENTE MIGUEL FACUSSE CONTINÚAN EXTERMINANDO INDÍGENAS Y CAMPESINOS ANTE LA IMPASIBILIDAD CÓMPLICE DEL GOBIERNO LOBO

Tres pobladores de las comunidades garífunas del sector de farallones del Departamento de Colon, fueron asesinados el sábado anterior cerca de una de las fincas de Miguel Facusse cuando salieron a pescar camarones.

Los ahora occisos José Olivera Nolasco, Roberto Enrique, Óscar Daniel desaparecieron desde el sábado por la mañana, pero fueron encontrados los domingos en mañana enterrados en una de las fincas del terrateniente Miguel Facusse, por miembros de la policía y familiares.

Es evidente de como la guardia privada de estos terratenientes, continúan haciendo de las suyas en diferentes sectores, de la cual la tierra esta apoderada de indígenas y pobladores.

De este hecho criminal se responsabiliza al encargado de la seguridad de Facusse quien es un oficial retirado del Ejército junto a cinco guardias más, quienes fueron detenidos ayer por miembros de la policía decomisándoles 10 escopetas y un arma 9 milímetros, así como también encontraron casquillos de bala en la finca en donde se encontraron los cuerpos enterrados.

Condenamos la política de exterminio en contra de las comunidades indígenas, afrodesendientes y campesinos de parte de los grupos armados de los terrateniente tal es el caso del sector de farallones, donde el señor Miguel Facusse tiene acaparado enorme extensiones de tierra.

Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA)

LA IMPUNIDAD EXTIENDE EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN HONDURAS.

Honduras tiene la más elevada tasa de homicidios del mundo, el doble de lo registrado 10 años atrás, la mayoría marcados por el narcotráfico, señaló un reciente informe de Naciones Unidas.

En 2001 el país centroamericano reportó 51 asesinatos por cada 100 mil habitantes y una década después ese índice subió a 92, por encima de países tan señalados por su elevada violencia como El Salvador (69) y Costa de Marfil (57).

El documento de la ONU intitulado Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe: Una Evaluación de las Amenazas, atribuyó el alza de la violencia al progresivo tráfico de drogas por Honduras hacia Estados Unidos a partir de una mayor arremetida en México contra el crimen organizado.

Fuente: Silvia Martínez Puentes, Prensa Latina, La Habana

MÉXICO

CARAVANA DE MADRES DE MIGRANTES DESAPARECIDOS EN TRÁNSITO POR MÉXICO

COMUNICADO DE PRENSA

Nos vamos ya rumbo al Sureste mexicano a recibir a las madres centroamericanas. Vamos cargando con papeles, lonas, gorras, camisetas, gafetes y sueños. Soñamos que las ayudaremos a cumplir su más caro deseo de encontrar a esos seres queridos que salieron un día en busca de la vida y de ellos no se supo mas.

Llegarán a El Ceibo, Tabasco el día 15 de octubre a las 9:00 de la mañana, procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, de donde partieron el 11 del presente en caravana, para recorrer parte de la ruta migrante de México. Las alimenta la esperanza de encontrar a sus hijos. Se invita a los compañeros de los medios de comunicación a que acompañen a estas madres en su viaje de 19 días por 23 localidades de 14 estados de la república mexicana.

Recibirán de entrada el abrazo de la Fiesta a la Esperanza que en homenaje a las a las víctimas de la violencia de Estado, organiza Fray Tomas en el albergue para personas migrantes "LA 72" en Tenosique y que como colofón irán a la frontera México-Guatemala a dar un gran abrazo a las madres centroamericanas compartiendo la premisa del evento "Todos los dolores, todas las luchas, toda la rabia, toda la esperanza".

Durante esta caravana, tendremos el enorme placer de ser el instrumento de reencuentro de 4 madres con sus hijos: a partir de la caravana del 2011, siguiendo las pistas que se encontraron, Rubén Figueroa del MMM, se dedicó a recorrer los lugares indicados y su empeño dio frutos: cuatro de ellos fueron identificados como familiares que se venían buscando en la caravana y que recompensan el enorme esfuerzo que realizan estas mujeres que teniendo muy poco, no dudan en salir de sus pueblos en busca de sus hij@s. Las madres son ejemplo de lucha través del tiempo.

La agenda que se incluye, da cuenta de la gran cantidad de actividades planeadas a realizarse en las paradas estratégicas de este recorrido, actividades propuestas e instrumentadas por una gran cantidad de actores locales que nos muestran el espíritu solidario y generoso que las madres incitan entre una muy variada cantidad de personas, grupos, instituciones, académicos, organizaciones y defensores de derechos de los migrantes y de los derechos humanos de todos y todas.

"Todos los dolores, todas las luchas, toda la rabia, toda la esperanza"

NICARAGUA

ELECTRIFICACIÓN, EL MAYOR LOGRO DEL GOBIERNO SANDINISTA

Desde el 2007 a la fecha el gobierno sandinista ha incrementado significativamente la cobertura energética nacional, no sólo en generación, ampliación de redes y la distribución, sino que además ha llevado electricidad a lugares pobres y aislados que nunca la tuvieron antes, y eso tiene un alto nivel de impacto social, sobre todo en la reducción de la pobreza... "En mi opinión, es sin duda el mayor logro del Gobierno de El Presidente (Daniel) Ortega. Esta tarea fue olvidada por 35 años en Nicaragua, donde la población tenía una cobertura de solo el 50% desde 1977. El integrar a 20% de la población al fluido eléctrico, ha sido poco mencionado", dijo a **INFORME PASTRAN** el empresario energético César Zamora... "Nada genera más desarrollo y bienestar en la economía familiar que darle acceso a luz eléctrica y agua potable. La calidad de vida en términos de salud, educación, productividad familiar e integración social son enormes. Un casa con electricidad es un hogar con un

potencial multiplicador de riqueza. Se pasa de niveles de consumo mínimos a que estos hogares tengan capacidad de poder generar bienestar y riqueza”, observó... Para el Gerente país de AEI Energy, “no hay una reforma social que transformé de manera radical a la familia, que darle el suministro eléctrico a los que no lo tienen”... “Es un acto de justicia social y de productividad de cara al futuro. Es una gran noticia que hay que reconocer y emular”, resaltó... Esta semana el gobierno nicaragüense desarrolló un Foro de Eficiencia Energética a cargo del Ministerio de Energía y Minas, para promover la generación con recursos renovables e independizarnos poco a poco del petróleo... El gobierno espera terminar este año con un acumulado del 40% de producción energética con recursos renovables y un 60% con petróleo. Para el 2013 con la entrada en funcionamiento y la ampliación de más proyectos con San Jacinto Tizate, Blue Power, Eolo, entre otros, la meta es llegar al 50%...

Para el 2017 el gobierno espera haber dado saltos cuantitativos y cualitativos, con proyectos como Casita-San Cristóbal y Tumarín. Con ambos proyectos la producción renovable llegaría aproximadamente a un 80% del total... El gobierno también ha avanzado, en cuanto a la cobertura. A partir del 2007 con el desarrollo de pequeñas hidroeléctricas y la instalación de paneles solares se ha llevado energía a unas 55 mil familias... El titular de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, dice que desde el 2007 a la fecha la cobertura de energía eléctrica pasó de un 52% a un 72%, para un incremento del 20%. Para el 2017 la meta es llegar a un 85 o 90%... Para el ministro, sin embargo, una de las líneas estratégica del gobierno es la eficiencia y el ahorro energético, ya que actualmente Nicaragua es uno de los países del área que consume más energía para producir 1 mil dólares de Producto Interno Bruto...

El gobierno está desarrollando una serie de proyectos energéticos agresivos. La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, anunció que ésta administración sandinista instalará 407 kilómetros de nuevo tendido eléctrico en pistas, avenidas y entradas a municipios, en todo el país... Detalló que 5 mil 633 cuadras serán iluminadas en barrios de todo el país y que se instalarán 16 mil 613 luminarias de alumbrado público en todo el territorio, porque “el mejoramiento del alumbrado público representa mejoría en nuestras vidas, para la tranquilidad y la seguridad de la familia”... El Plan también detalla que con la renovación del tendido eléctrico se beneficiará a un millón 237 mil 831 personas... El gobierno mantendrá el subsidio en la tarifa de electricidad a los consumidores de menos de 150 kilovatios hora por mes, que alcanza al millón de familias...

El gobierno del Presidente Daniel Ortega también está apostando por planes agresivos en la tecnología y las telecomunicaciones... Según ha dicho Rosario Murillo, entre los planes está instalar 11 mil 490 nuevas líneas convencionales, 709 mil 454 nuevas líneas celulares y se dará acceso a 133 mil 5 nuevos usuarios de internet... Debe tomarse en cuenta que a finales de este mes debe concretarse el acuerdo con la Gran Muralla China interesada en un satélite para comunicaciones y debe licitarse y adjudicarse una tercera operadora telefónica, de la que los chinos lucen como favoritos...

Tomado del INFORME PASTRAN

PANAMÁ

SITUACIÓN CAÓTICA EN COLÓN, PANAMA

Desde hace más de una semana la población de la ciudad y provincia de Colón, al norte del país, desembocadura del Canal de Panamá, sobre el Mar Caribe, se encuentra en una dramática situación: una desmedida represión policial y de la policía de frontera, bombas lacrimógenas, violación de domicilio, golpizas, detenciones arbitrarias, un niño de 10 años muerto de balas, una niña de cinco años y otra de catorce en condiciones muy graves, una señora mayor fallecida a causa de los gases lacrimógenos, en una palabra una flagrante violación de los derechos humanos. A este caos se suman las acciones de robo y de destrucción que personas amigas de lo ajeno van cometiendo, aumentando el nivel de inseguridad pública.

El pueblo de Colón, en una inusitada y creciente unidad de sus diversos sectores, mantiene una posición férrea de rechazo a la recién aprobada Ley 72 que el presidente Ricardo Martinelli acaba de

sancionar (estaba en gira por Alemania y Europa, regresó, firmó la ley y se fue inmediatamente a Japón, en donde se encuentra actualmente). Con esta ley el Gobierno abre el compás para vender las tierras en donde se encuentra asentada la conocida Zona Libre de Colón a las empresas que la ocupan. La razón que esgrimieron los diputados de la Asamblea Nacional, que es la razón del Ejecutivo, para configurar y aprobar esta ley es que un porcentaje de las ventas serían destinadas al desarrollo de Colón, mediante un fideicomiso compuesto por diversos sectores, la mayoría gubernamentales, en el que se quiere incluir a la jerarquía de la Iglesia Católica. Le lectura más acertada en opinión de los sectores críticos es que el gobierno de Martinelli está urgido de capital para solventar un declarado déficit de más de 400 millones en el actual presupuesto y, segundo, beneficiar al sector empresarial, nacional y extranjero, que es la tónica del presidente.

Hay que señalar que durante los breves días de discusión del anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional se dieron momentos tensos de protesta y rechazo a la pretensión de la venta de las tierras, sin embargo los señores diputados en menos de media hora le dieron aprobación con los votos del oficialismo, que son mayoría en la Asamblea.

Para entender la explosión social de Colón es necesario tomar en cuenta las condiciones históricas de vida de la población de esta parte norte del país: mayoritariamente de raza negra, especialmente en el sector urbano, víctima del desempleo, sin el servicio regular de agua potable, un desastre en las aguas servidas, hacinamiento habitacional, casas condenadas de madera que construidas a principio de siglo para albergar a los trabajadores del Canal Interoceánico, sistemas deprimentes de salud y de educación, y encima de todo ellos, la violencia y el robo.

El pueblo panameño no olvida las recientes tragedias causadas por este gobierno con la aplicación de leyes injustas como aquella Ley 30, conocida popularmente como la “ley chorizo” que cercenaba los derechos laborales humanos a los trabajadores, mayoritariamente indígenas, de la provincia de Bocas del Toro, que causó cientos de heridos y la muerte de varios dirigentes, como tampoco la dura represión ejercida por la policía contra la población indígena en las provincias de Chiriquí y Veraguas en el rechazo de la minería y de los proyectos hidroeléctricos que igualmente causaron los mismos estragos de muerte de indígenas, detenidos, golpeados, mujeres violadas.

Nunca nadie se explica cómo ocurre que al lado de un emporio comercial multimillonario como es la Zona Libre de Colón se dan condiciones de vida de la población, incluso trágicas, como las que mencionamos, cuando el desarrollo debiera florecer en esta región. Pero la razón es sencilla: una permanente política de olvido, de abandono, de engaño, de promesas electorales incumplidas, de desprecio a la población y del aprovechamiento desmesurado de parte del actual y de todos los gobiernos que con la aplicación de las políticas neoliberales no tienen ojos más que para la ganancia, no importa a qué precio. Con mucho orgullo el gobierno nacional

El pueblo de Colón y todas las organizaciones solidarias, como es el caso del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, FRENADESO, mantienen una posición firme, exigente y urgente ante el gobierno nacional para que regrese la tranquilidad a Colón: **que cese la represión contra el pueblo y sus dirigentes, la libertad a todos los detenidos y la derogación inmediata de la Ley 72.** Es entonces cuando podrán sentarse a dialogar para encontrar los caminos de solución a los problemas sociales que aquejan gravemente a la población. Mientras tanto, continuarán las acciones de presión de toda índole, la realización de encuentros de dirigentes, la suspensión de clases, la paralización solidaria del transporte, especialmente aquel que sirve a la propia Zona Libre de Colón.

La jerarquía de la Iglesia Católica en la Diócesis Misionera de Colón y Kuna Yala ha emitido en el día de hoy un comunicado señalando que “la falta de diálogo y de una consulta ampliada a todos los sectores de la sociedad colonense ha generado una confrontación violenta”, que “las necesidades de los colonenses son profundas” y hacen “un vehemente llamado a las autoridades públicas y a los sectores sociales .. a detener toda confrontación y violencia”.

El pueblo continúa luchando en estos momentos con la firme decisión de llevar al gobierno a la derogación de esta ley tan impopular.

COPODEHUPA apoya las demandas de las organizaciones populares de Colón y Panamá para que se instale la paz, cese la represión, se libere a los detenidos y, fundamentalmente, se derogue la

nefastas Ley 72, y hace un llamado al Gobierno nacional a instaurar de manera responsable un proceso de respeto y cumplimiento de los derechos individuales, económicos y sociales en la provincia de Colón y en todo el país.

Conrado Sanjur - Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA.

Panamá, 23 de octubre de 2012.

PUERTO RICO

PLAN MILITAR PARA PUERTO RICO

El Proyecto de Investigación Estratégica del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos tiene, desde el año 2011, un plan para restablecer las bases navales, aéreas y terrestres en Puerto Rico con la utilidad manifiesta de apuntalar la hegemonía estadounidense en el Caribe e influir específicamente en cambios políticos en Cuba.

“Será una victoria regional enorme para Estados Unidos”, afirmó el teniente coronel Lalo Medina, cuya propuesta se basa en que se escoja para Puerto Rico la anexión como estado de la Unión y se aprovechen las circunstancias que el proceso crearía para el resurgir como bastión militar de esta nación isleña del noreste del Caribe.

El documento, que el Colegio de Guerra advierte representa exclusivamente la opinión de su autor, toma como un hecho que la condición política de Puerto Rico “necesita evaluarse y cambiarse en el término de seis años” y coincide con la convocatoria de un plebiscito junto con los comicios generales de noviembre. En el mismo, se preguntará a los electores si desean que el país siga siendo colonia, además de escoger si prefieren la “estadidad” (anexión), la independencia o el Estado Libre Asociado Soberano (libre asociación).

El autonomista Partido Popular Democrático, principal de oposición, está pidiendo a sus seguidores que voten “Sí” a la primera pregunta y dejen en blanco la segunda pregunta, lo que dejaría el espacio abierto para que la anexión, defendida por el oficialista Partido Nuevo Progresista, pueda acumular una mayoría de sufragios. El PNP resulta además favorecido por la circunstancia de que se han declarado neutrales los partidos del Pueblo Trabajador, Movimiento Unión Soberanista, el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, lo que deja la defensa de la independencia al Partido Independentista Puertorriqueño solo.

Tanto el PNP como el PIP promoverán el “No” a la colonia en la primera pregunta, al igual que el nuevo grupo ALAS, que ha asumido la tarea de defender el ELA Soberano.

El sector militar independentista, representado por el Ejército Popular Boricua-Macheteros, rechaza toda participación electoral bajo el régimen colonial y continúa preparándose para la confrontación con las fuerzas armadas estadounidenses.

El estudio del teniente coronel Medina tiene coincidencias y diferencias con el que hizo la teniente Shirley Román para la Escuela Naval Postgraduada de la Armada de Estados Unidos en 1991. Pero en este otro documento, la opción favorecida para Puerto Rico fue el “Estado Libre Asociado mejorado” que, de hecho, ganaría el plebiscito de 1993.

La teniente Román planteó entonces que “las consideraciones prácticas dictan que este asunto se atienda en términos de los objetivos de las posiciones de política exterior de EEUU para Puerto Rico y el Caribe como un todo y lo que se percibe como lo mejor para los intereses nacionales de los Estados Unidos”.

Dentro de ese contexto, la teniente Román argumentó que lo que había que hacer era conceder a Puerto Rico más autonomía pero sin eliminar la dominación teniendo en cuenta “el hecho de que Estados Unidos ha logrado establecer una presencia fuerte en el Caribe, en parte por el desarrollo de bases del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada”. Además, argumentaba que “Estados Unidos deriva beneficios del status de Estado Libre Asociado a través de un monopolio económico bien sólido”.

En los años pasados desde entonces, la situación económica y militar ha variado mucho. El propio gobierno de EEUU eliminó los privilegios tributarios para la inversión de capital estadounidense en Puerto Rico –con lo que se cumplieron los peores pronósticos que hacía la teniente Román atribuyéndolos a la anexión o la independencia- y la lucha contra la Armada en Vieques marcó el fin de la era de las grandes bases militares y navales en esta nación isleña.

El teniente coronel Medina retoma esos puntos y plantea que se puede anticipar que con la anexión llegarían en masa inversiones de capitales para integrar la economía con la de EEUU. Además, indica que la experiencia de la lucha de Puerto Rico en defensa de Vieques fue precisamente lo que “hizo despertar” a EEUU sobre el hecho de que, aún bajo el régimen autonómico, “esta pequeña isla impactó el peso de la seguridad nacional de EEUU y potencialmente debilitó sus posibilidades de obtener apoyo latinoamericano”.

Pero, en su opinión, eso se corrige con la anexión, una de cuyas ventajas podría ser “un resurgir militar” con el cual se podrá “incrementar inmediatamente la seguridad en la región y establecer una presencia renovada en el Caribe”. “El estado de Puerto Rico será un jugador clave para ayudar en cualquier transición futura de una Cuba libre a la democracia”, dice el documento.

Su plan toma en cuenta esa oposición puertorriqueña y recomienda medidas cautelares de protección del ambiente en las nuevas instalaciones militares, se maneje adecuadamente los medios de comunicación masiva y se reclute el patriotismo y el entusiasmo de los puertorriqueños en el período de transición.

Uno de los aspectos más curiosos del plan es que plantea que si Puerto Rico se convierte en un país independiente “el deterioro por los problemas económicos probablemente provoquen altas tasas de crimen, incremento en la inmigración de otras islas caribeñas, tráfico de drogas y potencial de importación del terrorismo”. Pero casi todos esos problemas son ya cotidianos en esta nación isleña bajo la dominación de EEUU.

El teniente coronel Medina rindió su informe el 11 de marzo de 2011, justo el mismo día en que, luego de un prolongado período de alzamientos estudiantiles –en los que hubo enfrentamientos con la Policía nacional, heridos y torturados- estudiantes insumisos y grupos de apoyo celebraron un modesto acto de recordación del motín de esa misma fecha en 1971 en el que desconocidos mataron al comandante y un sargento de la unidad antimotines y a un cadete del Ejército. En esa ceremonia se volvió a escuchar el canto rebelde de la Universidad “está en la calle con su último detalle y su bomba molotov”.

Fuente: [Jesús Dávila](#). NCM Noticias

VENEZUELA

VENEZUELA, ¿UN PAÍS DIVIDIDO?

Las terminales políticas y mediáticas del capitalismo neoliberal llevan 14 años difundiendo el mensaje de que Hugo Chávez ha dividido a Venezuela en dos mitades irreconciliables. Las pasadas elecciones presidenciales serían una prueba más de esa polarización. “Venezuela se fractura en las urnas”, tituló El País en su edición en papel del 8 de octubre cuando, por la diferencia horaria en el momento del cierre del diario, aún no se conocía el resultado de los comicios. Por tanto, la dirección del periódico ya apuntalaba el argumento de la división antes incluso de saber el veredicto de las urnas.

La falsedad de esta razonamiento queda patente al comparar Venezuela con otros sistemas presidencialistas similares. Obama ganó en 1998 a John McCain por 7,2 puntos. François Hollande derrotó a Sarkozy por algo más de tres puntos, la misma distancia que la obtenida por el chileno Sebastián Piñera en 2009. El pasado mes de julio, Enrique Peña Nieto alcanzó la Presidencia de México seis puntos de ventaja sobre Manuel López Obrador.

Nadie dice que Estados Unidos, Francia, Chile o México estén fracturados, a pesar de que sus actuales presidentes ganaron las elecciones por menos diferencia que Hugo Chávez frente a Henrique Capriles (once puntos). En muchos sistemas democráticos, el electorado se agrupa en

torno a dos opciones políticas. Este fenómeno es más acentuado en regímenes presidencialistas y alcanza su máxima expresión en las elecciones a la Jefatura de Estado. Es algo que se considera absolutamente normal y que no indica ninguna división del país. Salvo en Venezuela, donde sería la prueba palpable de la radical partición provocada por Chávez.

Este argumento de la división tiene una segunda parte. Una de esas dos mitades sería la víctima, carente de derechos y libertades, mientras que la otra disfrutaría de todos los privilegios. Según el relato mediático del neoliberalismo, las supuestas víctimas optaron por Capriles por entender que defendía una Venezuela para todos y todas y no sólo para una parte.

Por tanto, el resultado de las elecciones debe interpretarse como un llamamiento a Hugo Chávez para que gobierne para toda Venezuela. Justo al día siguiente de la victoria de Chávez, comenzaron las apelaciones al diálogo, el consenso, la unidad, etc.

Un mínimo análisis revela que esta segunda parte de la argumentación también es falsa. Venezuela está hoy más cohesionada que hace 14 años. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Venezuela es el país donde más ha disminuido la desigualdad en los últimos diez años. Por su parte, el Programa para Asentamientos Humanos de Naciones Unidas señala que el país caribeño es, junto con Uruguay, el menos desigual de todo el subcontinente.

En 1998, más del 80% de la población no podía comer tres veces al día. En la actualidad, el 96% de los habitantes realiza tres o más comidas diarias. Se ha erradicado la mortalidad infantil y también el analfabetismo, a la vez que se ha extendido la enseñanza superior: Venezuela ocupa el quinto lugar del mundo en tasa de estudiantes universitarios. La sanidad gratuita se ha universalizado. Durante esta década, la riqueza se ha redistribuido, disminuyendo la pobreza de un 60% a un 28% y la pobreza extrema de un 25% a un 7%. Venezuela ya no es aquel país en el que un 85% de la población luchaba por sobrevivir mientras el 5% se iba cada fin de semana a Miami de compras.

El argumento de la división es utilizado por las élites económicas para salvaguardar sus intereses, muy diferentes a los de las clases populares y clases medias. En realidad, las preocupaciones de esta casta no tienen nada que ver con los de las 6,5 millones de votantes de Capriles, aunque el enorme dominio de los medios de comunicación que ostenta le haya permitido convencer a esa gran cantidad de gente de que sus intereses son los mismos.

Gobernar para todos y todas es que los beneficios del petróleo reviertan en el pueblo y no que las transnacionales se apropien este recurso estratégico, que es lo que realmente pretenden las élites y lo que ocurría en el pasado. Gobernar para todos y todas es universalizar la sanidad gratuita y no dejar la salud en manos de compañías de seguros, farmacéuticas y empresas sanitarias. Gobernar para todos y todas es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y no permitir que la comida sea una mercancía controlada por las grandes cadenas de hipermercados. Gobernar para todos y todas es crear universidades estatales de calidad y no limitar la enseñanza superior a carísimas instituciones privadas accesibles únicamente a los cachorros de la oligarquía. Gobernar para todos y todas es que el Estado construya directamente tres millones de viviendas en lugar de permitir la especulación inmobiliaria de la que sólo se benefician bancos y empresas constructoras.

Estos datos y consideraciones demuestran que el proyecto político liderado por Hugo Chávez gobierna para la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas. Venezuela está hoy más unida de lo que lo ha estado nunca en su historia.

Alejandro Fierro, periodista y colaborador de la Fundación CEPS